

- 1 **GUATEMALA**
¿Qué estuvo mal?
- 2 **PARAGUAY**
En defensa del guaraní
- 3 **COSTA RICA**
Contra explotación infantil
- 4 **CUBA**
El futuro en debate
- 6 **BOLIVIA**
Aumentan casos de VIH/sida
- 7 **ARGENTINA**
Nuevo nombre, nueva vida
- 8 **GUATEMALA**
Paraíso de asesinos misóginos
- 9 **JAMAICA**
No al continuismo
- 10 **URUGUAY**
Los sin tierra urbanos
- 12 **AMÉRICA LATINA**
Derechos indígenas protegidos



Paraguay: Indígenas guaraníes ven desdeñado su idioma por el Estado. Pag. 2

GUILERMO SECURERA

GUATEMALA

Louisa Reynolds desde Ciudad de Guatemala

¿Qué estuvo mal?

Escasa de fondos y con un mensaje confuso, Rigoberta Menchú queda muy detrás de poderosos candidatos.

En vísperas de las elecciones del 9 de setiembre, la candidata indígena Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992 y lideresa de Encuentro por Guatemala, criticó duramente las encuestas que la ubicaban en un sexto lugar de los 14 candidatos presidenciales.

“Los encuestadores han sido racistas y nos han ignorado”, dijo Menchú mientras repartía platos de sopa caliente entre los numerosos periodistas que se reunieron en su casa en un barrio residencial en las afueras de Ciudad de Guatemala.

Menchú confiaba en que las encuestas, que mostraban una caída del cuarto al sexto lugar desde que anunció su intención de postular a la presidencia en marzo (*NA, Mayo 30, 2007*), estuvieran equivocadas. Sin embargo, los resultados electorales fueron decepcionantes para la activista indígena.

Álvaro Colom, el candidato socialdemócrata de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quedó primero, con poco más de 28% de los votos, muy por debajo de la mayoría absoluta para ganar en primera vuelta, y tendrá que enfrentar al ultraderechista Otto Pérez Molina, del Partido Patriota (PP) de extrema derecha, que obtuvo 23.7%, en una segunda vuelta el 4 de noviembre.

Encuentro por Guatemala quedó en un lejano séptimo lugar con apenas 3% de los votos. Hasta en Uspantán, en el céntrico altiplano del departamento de El Quiché, donde nació Menchú, sólo 268 de los 11,730 electores votaron por ella.

¿Qué estuvo mal? La propia activista indígena se ha negado a hablar con la prensa desde que fueron anunciados oficialmente los resultados el 10 de setiembre, y no se sabe si abandonará sus ambiciones políticas.

El candidato a vicepresidente por Encuentro por Guatemala, Luis Fernando Montenegro, cree que Guatemala no está lista para una presidenta mujer e indígena, y que los estereotipos sexistas y racistas todavía prevalecen.

“El país no quiere cambiar”, dijo Montenegro. “Hicimos nuestro mejor esfuerzo y vamos a seguir trabajando”.

Según la antropóloga indígena Irmalicia Velásquez Nimatuj, la posición centroizquierdista de Menchú fue demasiado vaga y no pudo ganarse el apoyo de organizaciones indígenas de base. El partido indígena de Menchú, Winaq, en el que participan prominentes intelectuales indígenas que han desempeñado cargos en gobiernos anteriores, participaba en coalición con el novato Encuentro por Guatemala, dominado por ladinos (no indígenas), que defiende principalmente la transparencia gubernamental.

Noticias Aliadas, edición impresa, ofrece información y análisis sobre el acontecer de América Latina y el Caribe con énfasis en los temas que afectan a las poblaciones excluidas de la región. Versión en inglés: Latinamerica.Press.

Producido por **COMUNICACIONES ALIADAS**, organización no gubernamental con sede en Lima, Perú, que por más de 40 años produce información y análisis independiente y confiable. Nuestro objetivo es visibilizar los problemas y situaciones que transgreden los derechos humanos de las poblaciones excluidas y menos favorecidas de América Latina y el Caribe.

Directora ejecutiva: Raquel Gargatte Loarte

Directora de prensa: Elsa Chanduvi Jaña
(echanduv@noticiasaliadas.org)

Editoras: Cecilia Remón Amáiz, Leslie Josephs

Editor gráfico: William Chico Colugna

Impresión: Ediciones Atenea E.I.R.L., Jr. Carlos Gonzales 252, Lima 32, Perú (511) 452 4239

Comunicaciones Aliadas

Jirón Olavegoya 1868, Lima II, Perú

(511) 265 9014 Fax: (511) 265 9186

postmaster@noticiasaliadas.org

www.noticiasaliadas.org

www.latinamericapress.org (en inglés)

Además de nuestra edición impresa, ofrecemos recursos electrónicos y en línea, así como informes especiales y servicios informativos gratuitos por e-mail.

Para información de servicios y productos, contactarse con Patricia Díaz, Responsable de Mercadeo, a pdiaz@noticiasaliadas.org

“Winaq no fue capaz de lograr una propuesta que emergiera con un gran componente maya en la cual se hablara de equidad, de exclusión y de posesión de la tierra en su justa dimensión”, manifestó Velásquez Nimatuj.

Cuando Menchú anunció su candidatura a la presidencia, muchos creyeron que atraería el amplio apoyo de organizaciones indígenas y campesinas. Sin embargo, la falta de respaldo a nivel de base se hizo evidente durante la clausura de la Tercera Cumbre Continental de Pueblos y Organizaciones Indígenas el 31 de marzo. Los integrantes de Winaq solicitaron a las organizaciones presentes en la cumbre aprobar una moción en apoyo de la candidatura de Menchú, pero fue rechazada abrumadoramente.

Luego de la cumbre, muchos de los principales grupos de bases, como la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas y el Frente Nacional de Lucha, rechazaron abiertamente a la Premio Nobel.

El analista político Julio Ligorria precisa que al postular con un empresario ladino como vicepresidente, Menchú estaba enviando mensajes contradictorios. ¿Estaba luchando a favor de los pobres del campo o el partido ladino de clase media simplemente estaba utilizando su prestigio como ganadora del Premio Nobel?

Menchú fue cortejada por dos partidos: Encuentro por Guatemala y la ex guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Descartó a la última temiendo que pudiera ser catalogada como “radical”, pero al participar con Encuentro por Guatemala se distanció de las organizaciones indígenas de base y de los movimientos sociales.

Rigoberto Quemé, líder maya kiche’ y ex alcalde de Quetzaltenango, cree que una alianza con cualquier partido ponía en desventaja a Winaq desde el comienzo.

“Es que estar de recomendado en un partido es como estar de arrimado en una casa: en cualquier momento te sacan”, afirmó.

Sin embargo, otros son más optimistas y creen que Menchú volverá a participar en las elecciones del 2012. Como la primera mujer indígena en postular para la presidencia, la Premio Nobel inyectó una bocanada de aire fresco a la mediocre campaña deslucida por la violencia y las difamaciones.

Mientras que Colom y Pérez Molina pronunciaban discursos incendiarios y trataban de ganar puntos fáciles insultándose mutuamente, Menchú hablaba de construir una nación nueva y más inclusiva en que los guatemaltecos indígenas y no indígenas disfruten de los mismos derechos. Pero con pocos recursos para publicitar su campaña, Encuentro por Guatemala no pudo ser rival para los favoritos, que gastaron millones de quetzales en campañas a todo dar y manifestaciones a gran escala en que abundaron los regalitos.

Sin embargo, cuando Menchú anunció su decisión de postular a la presidencia en marzo pasado, dejó en claro que su meta como recién llegada a la escena política era ganar las próximas elecciones del 2012. Como ensayo, quedar séptima entre 14 candidatos y con un partido naciente es un resultado respetable. □

PARAGUAY

Gustavo Torres desde Asunción

En defensa del guaraní

Pese a su hegemonía, idioma indígena es desdeñado por el Estado.

Un 90% de los 5.7 millones de paraguayos habla o entiende guaraní. Sin embargo, en la práctica esta lengua precolombina siempre fue marginada.

Si bien el guaraní —*avañe’ê* o lengua del hombre—, junto con el castellano, son idiomas oficiales de Paraguay desde 1992, el Estado paraguayo sigue funcionando única y exclusivamente en castellano, violando flagrantemente la Constitución y los inalienables derechos de los guaraníhablantes.

Los medios de comunicación, casi en su totalidad, funcionan en castellano, lo mismo que todos los municipios, inclusive aquellos en donde la absoluta mayoría de la población habla solamente guaraní. Los documentos en general están en castellano, pero la cédula de identidad policial va mucho más allá: es bilingüe pero en castellano e inglés.

“El Estado paraguayo se organiza en función al 7% de la población monolingüe en castellano, en detrimento del 27% que solamente habla el guaraní”, afirma Miguel Ángel Verón, especialista en guaraní, director de la Fundación Yvy Marâe’y y dirigente del Movimiento de Educadores Jekutyryrâ (solidaridad, en guaraní).

En setiembre de 1992, el Congreso Nacional sancionó la Ley 28/92 que garantiza la enseñanza del castellano y del guaraní en las escuelas paraguayas.

Sin embargo, dice Verón, “hay una clara señal de boicot desde el Estado, considerando que de las 20,000 escuelas que existen en el país, en la actualidad sólo en ocho de ellas se aplica la modalidad guaraníhablante —que otrora llegó a 500 escuelas— cuando dicha modalidad debía ser aplicada en 10,000 escuelas como mínimo, teniendo en cuenta la cantidad de niños y niñas guaraníhablantes que ingresan al sistema”.

Para Ramiro Domínguez, integrante de la Comisión Nacional del Bilingüismo el dictado de clases en lengua castellana a estudiantes de zonas rurales que hablan y pien-



Un vistazo por la región

- 2 AMÉRICA LATINA
Ayuno contra deuda externa
- 3 PERÚ
Protección a pueblos aislados
- 4 ECUADOR
CIADI rechaza pedido de OXY
- 5 PARAGUAY
Oviedo en libertad
- 9 MÉXICO
Televisoras pierden batalla

AMÉRICA LATINA

Ayuno contra deuda externa. El 6 de setiembre se inició un ayuno global de 40 días en reclamo de la condonación de la deuda externa de los países más pobres del mundo, en el que participan numerosas personalidades.

“Queremos dar un testimonio, llamar a la conciencia internacional, reflexionar, pedir políticas para los más pobres y para la redistribución del ingreso, porque sólo así lograremos que la democracia sea una democracia real”, dijo uno de los ayunantes, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nóbel de la Paz 1980.

La condonación se considera requisito básico para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, adoptados por la comunidad internacional y cuya meta central es reducir a la mitad el hambre y la pobreza extrema para el 2015.

El ayuno es la antesala de la Semana de Acción Global contra la Deuda Externa a realizarse entre el 14 y 21 de octubre, durante la cual se llevarán a cabo movilizaciones, ayunos, foros de debate, uso de distintivos, talleres, desfiles y otras actividades.

Los promotores pertenecen a Jubileo Sur, red de más de 85 organizaciones en 40 países de América Latina y el Caribe, África y Asia-Pacífico, constituida en 1999 para promover la anulación de la deuda de los países pobres. —IPS.

PERÚ

Protección a pueblos aislados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió en agosto dos resoluciones en las que solicita al Estado peruano que le informe sobre la protección efectiva que ejecuta a favor de los pueblos indígenas amazónicos en aislamiento voluntario y contacto inicial en zonas reservadas ubicadas en los departamentos de Cusco, Loreto y Ucayali.

Alberto Pizango Chota, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDSEP), informó que la CIDH adoptó esas resoluciones ante dos medidas cautelares interpuestas por su organización en defensa de los indígenas aislados.

En la resolución MC-102-07 del 7 de agosto, la CIDH demanda a las autoridades peruanas “garantizar la vida, la integridad personal y la salud de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial kugapakori nahua y nanti”, que habitan en los departamentos de Cusco y Ucayali.

La segunda resolución —MC-129-07 del 15 de agosto— se refiere a la protección de los pueblos waorani (tagaeri tarome-mane), pananjuri (arabela) y aurishis o abijiras, que habitan en el departamento de Loreto, y solicita al Estado peruano que informe sobre el impacto de la exploración y explotación petrolera en esa zona.

Pizango dijo que las resoluciones “deben servir de advertencia a los funcionarios del gobierno central, ministerios, gobiernos regionales, etc., de que cualquier omisión sobre la protección a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial será observado severamente por los órganos judiciales supranacionales”. —NA.

san en guaraní sigue siendo un problema por resolver por parte del Ministerio de Educación y Cultura y una forma de discriminación en el sistema educativo, teniendo en cuenta que los docentes hacen de traductores para que los niños interpreten los contenidos de las lecciones que están en castellano ante la falta de materiales impresos para que los maestros puedan trabajar con sus alumnos con base en textos en guaraní.

Sin embargo, para Domínguez “no cabe duda que el guaraní atraviesa en la actualidad por tiempos mejores; muchas cosas han cambiado positivamente a favor del idioma, que ha ganado mucho espacio positivo en la conciencia ciudadana”.

David Galeano, director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, comenta que “comparado a 20 años atrás, el guaraní cuenta con muchísimos profesores y licenciados para su promoción y enseñanza, se halla inmerso en la Reforma Educativa y también es enseñado en numerosas carreras universitarias”.

En los últimos 100 años sus hablantes padecieron todo tipo de atropellos verbales, dice Galeano. Se les llamaba despectivamente “guarango”, “campesino”, “indio” o “juruky’a” [boca sucia].

“Otros fueron castigados físicamente recibiendo bofetadas, o recorriendo el patio escolar repitiendo ‘no voy a hablar más guaraní’, arrodillándose sobre sal gruesa, o siendo sometidos a la degradante experiencia de bajar de grado o curso por el solo hecho de hablar guaraní”, testimonia Galeano.

Antes de la colonia, el guaraní era el idioma dominante en vastos territorios de la costa atlántica de América del Sur, desde el mar Caribe hasta el Río de la Plata.

En la actualidad es hablado por entre 7 millones y 12 millones de personas. Además de Paraguay, se habla en las provincias argentinas de Misiones, Corrientes y en el litoral de ese país —como resultado de las continuas migraciones hacia los grandes centros urbanos, el guaraní tiene vigencia además en las ciudades de Santa Fe, Rosario, Buenos Aires y La Plata—; Río Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina, en Brasil; Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, y en Uruguay.

Gracias a la gestión de varias instituciones educativas y culturales, de organizaciones sociales paraguayas y al apoyo internacional, los ministros de Cultura del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), en su XXIII Reunión realizada en Río de Janeiro en noviembre del 2006, y luego los presidentes de los Estados-parte (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela) y de los Estados asociados (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú), en su XXXI Cumbre en Río de Janeiro en enero de este año (*NA, Ene. 24, 2007*), incorporaron al guaraní como “uno de los idiomas del MERCOSUR”.

Sin embargo, hay quienes como Galeano señalan que el no indicarse expresamente que el guaraní es idioma oficial del MERCOSUR es lo mismo que nada. Por ejemplo, las resoluciones del organismo no son traducidas al guaraní.

Uno de los últimos gestos que hizo como ministra de Educación la actual candidata presidencial por el gobernante Partido Colorado, Blanca Ovelar de Duarte, fue la entrega en julio al presidente Nicanor Duarte Frutos del Proyecto de Ley de Lenguas, impulsado además por la Comisión Nacional de Bilingüismo y el Taller de la Sociedad Civil.

La norma —que todavía no ha sido presentada al Congreso para su debate— impulsa la no discriminación por razones lingüísticas y establece la igualdad de los instrumentos jurídicos en guaraní y castellano.

También reglamenta los artículos 77 y 140 de la Constitución Nacional, referidos a la enseñanza en lengua materna y a la declaración del castellano y el guaraní como lenguas oficiales. □

COSTA RICA

George Rodríguez desde San José

Contra explotación infantil

Se lanzan iniciativas para combatir trata de niños y adolescentes.

La explotación infantil en Costa Rica se ha convertido en un flagelo que tanto el gobierno como instituciones privadas han decidido combatir.

Un centenar de puntos no vigilados en las dos fronteras terrestres de Costa Rica facilitan el tráfico de menores con fines de explotación. Cuatro de cada 10 personas que cruzan las fronteras sur y norte —330 km con Panamá y 309 km con Nicaragua— son menores, y la edad mínima de las víctimas de esa actividad delictiva es 12 años, según la Organización Internacional para las Migraciones.

A nivel centroamericano la trata de menores significa un lucrativo negocio ilegal que genera para sus impulsores ganancias estimadas en US\$17 millones cada año, señala la no gubernamental Fundación Paniamor, que promueve los derechos de los menores de edad en Costa Rica.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define como trata “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al

abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.

En el caso de Costa Rica, los principales destinos de las víctimas de la explotación sexual son algunos de los numerosos polos de desarrollo turístico, principalmente localidades de la costa del Pacífico, incluyendo los balnearios de Jacó y Tamarindo.

En opinión de la coordinadora del Proyecto Código de Conducta de la Fundación Paniamor, María Teresa Guillén, el puesto fronterizo de Peñas Blancas, a unos 311 km al noroeste de San José, “requiere un mayor control” en materia de tráfico de menores.

La experta italiana Vittoria Cortemiglia, funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sostiene que la trata de menores constituye una actividad propia de “la delincuencia organizada, grupos criminales organizados”.

“No son uno o dos criminales que explotan a una o dos chicas sino que son grupos organizados, esquema en el cual interviene, indudablemente, el factor corrupción, cuyos componentes incluyen la elaboración de pasaportes falsos”, planteó Cortemiglia. “Como parte de la lucha contra un fenómeno extremadamente complejo, es necesario hacer frente a la corrupción, en Costa Rica en particular”.

En este sentido, según Cortemiglia, la adopción ilegal es un delito que constituye un instrumento facilitador del tráfico de menores, y que igualmente genera elevadas ganancias para quienes lo cometen.

“El tráfico de personas, para los criminales, es incluso más fácil, porque hay menos riesgo de ser detectados”, precisó Cortemiglia, además de que “las penas normalmente son más bajas en comparación con las penas por el tráfico de drogas o de armas”.

Como aporte para combatir este flagelo, la fundación Paniamor y el Instituto Interregional de Investigación de Delitos y Justicia, perteneciente a la ONU, organizaron en julio un taller de capacitación sobre trata de menores. La actividad fue dirigida a una treintena de jueces y fiscales, además de funcionarios de la Dirección General de Migración de Costa Rica.

Según la definición de la OIT, la trata tiene como objetivo la explotación. “Esa explotación incluirá, como mínimo, la prostitución u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”, explica.

Para fortalecer el combate de la explotación sexual de menores, el gobierno costarricense puso en vigencia el 18 de julio la Ley de Fortalecimiento de la Lucha contra la Explotación Sexual Infantil. Entre otros aspectos, esta ley establece la penalización tanto de la producción como de la tenencia de material pornográfico que involucre a menores, y define líneas de parentesco y relaciones de poder entre victimarios y víctimas para la tipificación de delitos.

El presidente Óscar Arias advirtió que “la firma de esta ley no es suficiente. Tiene que ser complementada con la comprensión de que no basta luchar contra la explotación sexual infantil, porque ella sólo surge cuando existen ciertas condiciones disfuncionales en el seno de nuestra sociedad”.

En opinión de la diputada Ana Elena Chacón, del opositor Partido Unidad Social Cristiana y una de las principales promotoras de la ley, es necesario “cambiar un patrón cultural de años de abuso y de una sociedad permisiva”.

“Hace falta tener un país en donde exista tal nivel de justicia que ningún niño o niña se encuentre en una condición tan vulnerable como para que sea atrapado por esas mafias organizadas que están vinculadas al narcotráfico”, dijo Chacón, quien fue vice-ministra de Seguridad durante el gobierno del ex presidente Abel Pacheco (2002-2006). “No debemos de olvidar que este país ha sido promocionado por la internet como un país de destino turístico sexual”. □

CUBA

Lucila Horta desde La Habana

El futuro en debate

Cubanos coinciden en necesidad de realizar transformaciones económicas y sociales.

Tras un año de gobierno interino a cargo de Raúl Castro, en Cuba se acometen acciones para acrecentar la calidad de vida de la población y buscar adecuaciones para el modelo socioeconómico existente.

Promovido desde las propias estructuras de gobierno, se insta al debate sobre el futuro del socialismo cubano.

En esa dirección se hizo en junio un exhaustivo análisis encaminado a identificar los problemas y sugerir soluciones por parte de los dirigentes de las 169 Asambleas Municipales del Poder Popular, los órganos de gobierno local, y se libró una convocatoria abierta para que otro tanto se haga en centros de trabajo y estudio.

ECUADOR

CIADI rechaza pedido de OXY.

Como un triunfo fue considerado el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial, el 20 de agosto, que rechazó la pretensión de la empresa estadounidense Occidental Petroleum (OXY) de imponer medidas cautelares en contra de Ecuador.

En mayo del año pasado, el gobierno ecuatoriano dispuso la caducidad del contrato con OXY y la transferencia de la concesión del Bloque 15 a la empresa estatal Petroecuador, por haber violado el contrato de explotación y explotación petrolera que mantenía con Ecuador al haber vendido sin autorización el 40% de sus activos a la petrolera canadiense EnCana en el 2000 (*NA, Mayo 31, 2006*).

La transnacional estadounidense de inmediato presentó una demanda ante la CIADI contra Ecuador —quinto productor de petróleo de América del Sur— por haberle retirado sus concesiones y expulsado del país por violaciones contractuales que dice no cometió.

Entre las medidas cautelares exigidas por la OXY estaba la destitución de la actual administración del Bloque 15 y el nombramiento de una junta de supervisión conjunta, que el gobierno destinara US\$350 millones al año para financiar las operaciones e inversiones en dicho bloque, la entrega mensual por parte del gobierno de documentos e informes relativos a las operaciones, actividades, presupuestos y cuentas del bloque, y el impedimento de transferir la propiedad del Bloque 15 a un tercero. —NA.



MARTA SOLO

La existencia de dos monedas trae diferencias en la población.

PARAGUAY

Oviedo en libertad. Luego de permanecer tres años en una prisión militar, el general en retiro Lino Oviedo fue puesto en libertad el 6 de setiembre.

Oviedo estaba cumpliendo una condena de 10 años de cárcel por el intento de golpe en 1996 contra el ex presidente Juan Carlos Wasmosy (1993-98). El tribunal militar que ordenó su libertad condicional determinó que Oviedo ya había cumplido más de la mitad de su condena tomando en cuenta los cuatro años que permaneció detenido en Brasil —a donde fugó en 1999— antes de retornar a Paraguay en el 2004.

Oviedo, líder del partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE), tiene intenciones de participar en las elecciones generales del próximo año, para lo cual deberá ser autorizado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. —NA.

Entre los asuntos debatidos estuvieron los inherentes a evitar la corrupción y el delito, sobre todo los vinculados a esferas de los servicios a la población o la suficiencia alimentaria y todo cuanto entorpece el incremento de la producción agrícola, en busca de mayor oferta y una disminución de los precios al consumidor, así como reducir las importaciones (NA, *Ene. 24, 2007*).

Como avance en ese terreno, de abril a junio del 2007 fueron pagados 25 millones de pesos (poco más de US\$1 millón) que les debían varias empresas estatales a campesinos privados (NA, *Mar. 7, 2007*) y quedó establecido el mecanismo financiero para evitar anomalías así.

También, en agosto, se procedió a aumentar hasta en 250% el precio que se paga a los productores de leche y carne, para estimular los volúmenes de esos bienes, al tiempo que fueron adoptadas medidas organizativas que agilizan la distribución de los lácteos.

El gobierno de Raúl Castro no ha partido de cero para la realización de algunas obras. Aunque con algunas irregularidades e insuficiencias, se continuaron los planes de construcción de viviendas (NA, *Mayo 16, 2007*), las reparaciones de escuelas y hospitales, el plan para rehabilitar las redes hidráulicas y la extensión de acueductos, la instalación de modernos equipos de diagnóstico y tratamientos en todos los centros hospitalarios del país, mientras se crearon otras salas de video, los Joven Club de Computación y laboratorios de informática.

Se abrieron “canales provinciales y municipales de televisión; comienzan a llegar los primeros ómnibus y locomotoras chinas (para aliviar el crítico servicio de transporte); se construyen almacenes de alimentos de última tecnología, fábricas de pastas, fideos, yogur de soya, chocolate; se han aumentado las cuotas normadas de arroz, granos y huevos [desde el 2006] y realizado los primeros incrementos de salarios y pensiones [desde finales del 2005]”, recordó el vicepresidente Carlos Lage ante las autoridades de base del Poder Popular en junio.

Esos beneficios, entre otros que disfrutaban los cubanos en medio de obvias carencias, hacen que la mayor parte intente salvar lo alcanzado y quiera cambios, pero partiendo de preservar el patrón de equidad imperante. El propio jefe de gobierno interino cuestionó a los funcionarios que se niegan a realizar transformaciones y tocó varios de los dilemas existentes en el país durante su discurso del 26 de julio pasado, aniversario del asalto al Cuartel Moncada, en 1953, que intentó derrocar al dictador Fulgencio Batista.

“Somos conscientes... de que el salario aún es claramente insuficiente para satisfacer todas las necesidades, por lo que prácticamente dejó de cumplir su papel de asegurar el principio socialista de que cada cual aporte según su capacidad y reciba según su trabajo. Ello favoreció manifestaciones de indisciplina social y tolerancia que una vez entronizadas resulta difícil erradicar”, dijo Raúl Castro en su discurso.

Aseguró además que se estudian los inconvenientes, buscándoles soluciones. “Habrá que introducir los cambios estructurales y de conceptos que resulten necesarios. Igualmente se requiere... recuperar la producción industrial nacional e incorporar nuevos renglones que eliminen importaciones o creen nuevas posibilidades de exportación”.

Partiendo de aspectos como esos ya transcurre el debate ciudadano y la recolección de criterios sobre posibles transformaciones en la economía y otras propuestas. Es un recurso empleado en otros momentos antes de aplicar resoluciones importantes.

Animados desde abril por la revista *Temas* a pronunciarse sobre alternativas aplicables, varios académicos coinciden en que, para que la economía evolucione satisfactoriamente, se requieren variaciones en el sistema de propiedad y en las condiciones de la tenencia de los recursos. Debe eliminarse la excesiva centralización. Todos se inclinan también por que se creen cooperativas para los servicios y algunas pequeñas industrias.

Para la doctora en filosofía Isabel Monal, “la propiedad social de los medios de producción no está funcionando... Una de las dificultades es que los trabajadores no se sienten dueños de sus medios de producción”.

Aurelio Alonso, politólogo, opina en ese terreno: “El Estado socialista tiene que mantener una función reguladora, ser un inversor, y también propietario de los recursos naturales, de los grandes servicios públicos... Pero también debe legitimar la economía mixta, incluyendo no sólo la inversión extranjera, sino la nacional”. Los pequeños comercios y empresas de servicio no tienen por qué formar parte del andamiaje estatal.

El profesor Pedro Campos es escéptico. Cree que las grandes inversiones oficiales caen en saco roto y serán despilfarradas por los “mismos ministerios ineficaces”. Pese a ello hizo propuestas que van desde la eliminación de una de las dos monedas circulantes [el peso cubano y el peso convertible equivalente al dólar] hasta el modo, en su criterio óptimo, de organizar la agricultura, por medio de entregar en usufructo la tierra cultivable ociosa a “grupos de campesinos que estén interesados en formar cooperativas” y “liberalización plena del mercado interno de todos los productos agropecuarios y pesqueros”.

Ramón de la Cruz Ochoa, jurista, ubica también entre los problemas graves “la doble circulación de moneda o la diferencia entre los salarios y el costo de la vida, que sigue siendo demasiado pronunciada”, y problemas derivados de la laxitud en la exigencia administrativa que potenciaron la indisciplina laboral.

A escala de calle no es difícil tropezarse con criterios como el de Elíades Consuegra, técnico en calderas, quien resume algunas inquietudes: “Raúl no dijo qué es lo nuevo que se hace o se hará, pero saber que hay conciencia de que hacen falta cambios, anima”. □

Aumentan casos de VIH/sida

Personal médico teme epidemia por falta de información y prejuicios.

“Por falta de información, en nuestra sociedad existen aún muchos prejuicios sobre el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). La gente cree que puede contraer el virus como se contagia un resfrío. A veces, las familias fumigan sus casas o queman sus ropas al enterarse de que uno de sus miembros tiene VIH”, dice Juan Monroy, presidente del grupo de autoapoyo Más Vida, con sede en La Paz, Bolivia.

Hace cuatro años, los médicos constataron que Monroy es portador del virus del sida. Su caso contradice uno de los tantos prejuicios sobre la enfermedad.

“Muchos piensan que el sida sólo afecta a homosexuales y trabajadoras sexuales. La gente no entiende que los portadores del virus puedan ser heterosexuales y tener familia”, lamenta Monroy, que es divorciado y tiene hijos.

A la asociación Más Vida acuden 32 personas portadoras del virus que se apoyan mutuamente para poder llevar una vida normal, a pesar de su condición.

“Lo primordial es que acepten que son portadores del VIH”, dice Monroy. “En caso contrario corren el peligro de sufrir depresiones y de abusar del alcohol y las drogas. A veces sienten necesidad de encontrar un culpable, y están los que llegan incluso a transmitir la enfermedad en forma dolosa”.

El tema del VIH/sida no recibe mucha difusión en los medios bolivianos. Según datos oficiales, sólo hay 2,394 casos confirmados en el país. Sin embargo, un estudio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que aún no ha sido publicado, estima la cantidad de bolivianos portadores del virus en 18,000.

La enfermedad ya ha pasado del grupo de mayor riesgo, hombres que tienen sexo con hombres, a la población heterosexual.

“Aunque muchos de nuestros pacientes son hombres homosexuales, uno de cada tres es mujer. En general, son casadas y no han tenido otra pareja que su esposo, que les ha sido infiel”, dice la doctora Rosa Vargas, jefa del Centro Departamental de Vigilancia y Referencia (CDVIR) de La Paz, perteneciente al Ministerio de Salud.

El CDVIR proporciona un servicio integral a los infectados: ayuda psicológica, atención médica general y medicamentos antirretrovirales para controlar la enfermedad. La atención es totalmente gratuita para los 340 pacientes que actualmente son atendidos por el centro.

“Los pacientes con VIH son muy especiales debido a la estigmatización de que son objeto. Tienden fácilmente a interpretar el gesto más inocente como una agresión. Necesitan mucha ayuda psicológica, hasta el punto que hemos pensado en ofrecerles atención psiquiátrica. A veces se sienten perseguidos o están convencidos de que la gente los mira y piensa que están enfermos”, cuenta Vargas.

Para evitar la difusión de la enfermedad es necesario rastrear a las personas que han tenido relaciones sexuales con los pacientes.

“Cuando les decimos que deben informar a sus anteriores parejas, los pacientes reaccionan de diferentes maneras. Algunos traen a sus parejas para que se hagan las pruebas. Otros se niegan a contarles, porque no quieren que se sepa que están infectados. Eso nos impide prevenir más casos”, lamenta.

Vargas considera que el machismo es un factor importante en la difusión del VIH en la sociedad boliviana. “El machismo está muy arraigado en nuestra sociedad. A muchos varones no les gusta usar condones. Y cuando ellos no los quieren usar, las mujeres tampoco lo exigen”.

El Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA del Ministerio de Salud tiene a su cargo la prevención de las enfermedades de transmisión sexual.

El doctor David Segurondo, responsable del programa en La Paz, explica que para frenar el VIH “realizamos tareas de información y comunicación con diferentes sectores de la población: trabajadoras sexuales, Ejército, Policía, presidiarios, jóvenes”.

El programa ofrece pruebas rápidas a esos grupos, a fin de detectar nuevos casos. También se ofrece la prueba rápida a mujeres embarazadas y a personas que han contraído otras enfermedades venéreas.

Uno de los obstáculos para la concientización es la falta de recursos. Sólo en contadas ocasiones el programa puede llegar a las zonas rurales. Por ello se limita a capacitar al personal médico de los puestos de salud para que éste, a su vez, informe a los campesinos.

Segurondo opina que para frenar el avance del VIH es necesario que la educación sexual se convierta en una materia escolar, “pero los padres se oponen. Algunos llegan incluso a exigir que se despidan a los docentes que explican cómo y por qué se usa el condón”.

Sin embargo, Segurondo ha podido constatar un pequeño cambio en la actitud de los padres jóvenes. “Son un poco más abiertos y pueden hablar sobre la sexualidad con sus hijos, aunque no es suficiente. Y si los adolescentes no reciben información sobre sexualidad y anticonceptivos en sus casas, el Estado tiene que asumir esa responsabilidad”, sostiene. □



Juan Monroy

“Los pacientes con VIH tienden fácilmente a interpretar el gesto más inocente como una agresión. Necesitan mucha ayuda psicológica”.

— Dra. Rosa Vargas

ARGENTINA

Pablo Waisberg desde Buenos Aires

Nuevo nombre, nueva vida

Por primera vez, hija de un represor cambia de apellido.

“Vengo a solicitar se declare la supresión de mi apellido paterno de mi documentación personal conforme disposiciones de la ley vigente que lo autoriza en casos como el mío, en que hay motivos justos y pública deshonra del apellido por parte de mi padre”, escribió Ana Rita Pretti en frío, monocorde, lenguaje judicial.

Ese fue el primer párrafo de la demanda que inició en marzo del 2005 y, después de un demorado trámite burocrático, logró en abril de este año que su apellido materno figure en todos sus documentos. Se convirtió en Ana Rita Vagliati y en la primera hija de un represor que decide terminar con esa herencia.

Su padre, Valentín Milton Pretti, fue uno de los lugartenientes de Ramón Camps, el jefe de la Policía bonaerense de la dictadura (1976-83). Era, también, compinche del entonces subjefe policial Miguel Etchecolatz, condenado a cadena perpetua el 19 de setiembre del 2006 bajo la figura de genocidio y considerado uno de los responsables ideológicos de la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave de este caso, quien fue visto por última vez un día antes de que se dictara el veredicto, cuando se dirigía a presenciar el último tramo del proceso judicial (*NA, Oct. 18, 2006*).

Durante el régimen militar, Pretti actuó al menos en cuatro centros clandestinos de detención. Entre los operativos en los que participó se cuenta la “noche de los lápices”, como se bautizó al secuestro y desaparición de seis estudiantes secundarios en setiembre de 1976. Los chicos, de entre 16 y 18 años, pedían un boleto estudiantil a menor precio para viajar en transporte público.

“Me dijo que los mató”, recuerda Ana Rita.

De 35 años de edad, es la tercera de cuatro hermanos. Es la única mujer, la única que enfrentó abiertamente a su padre y la única que decidió cambiarse el apellido. Es

“Creo que en algunos sectores de la sociedad logré romper con la teoría de los dos demonios”.

— Ana Rita Vagliati



Ana Rita se enfrentó a su padre, ex represor, “por pública deshonra” de su apellido.

la única que siente tristeza cuando nombra a su padre, fallecido en abril del 2005, poco después de que ella iniciara el trámite para llevar el apellido de su madre, Juana Vagliati, también fallecida.

Aunque relató muchas veces su historia, algo cambia en ella cuando tiene que expresar los por qué de una decisión como esa. Sus ojos dejan de sonreír con ese desenfado tan Ana Rita, parece que miraran hacia dentro, y de pronto emerge sólida, entera: “La posición más cómoda fue la que tomó mi papá, que justificó todo lo que hizo con la ‘teoría de los dos demonios’ [la represión indiscriminada del Estado fue en respuesta a las acciones de grupos guerrilleros] pero yo sentí que tenía que romper con eso, sentí que tenía que poner sobre la mesa que mi viejo también fue producto de este Estado que aplicó el terrorismo”.

Con sus hermanos pasaron “cosas distintas”. Ninguno siguió su camino. “El mayor niega todo, el que le sigue no quiere hablar del tema y con el más chico es con el que más puedo conversar esto. Supongo que tiene mucho que ver [con] las identificaciones

familiares. Ellos se identifican más con mi padre; claramente ellos son Pretti y yo Vagliati”, define.

Romper con la herencia paterna no fue simple. Llevó muchos años de psicoanálisis y una larga maduración, que fue creciendo al calor de su militancia social. Los primeros libros sobre marxismo los encontró en la biblioteca de su padre, que habían sido tomados como “botín de guerra”. Durante su paso por la universidad, Ana Rita fue presidenta del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Actualmente, Ana Rita desarrolla distintas tareas en los barrios pobres del Gran Buenos Aires, donde campean la desocupación, la droga barata y la falta de oportunidades.

Entre todas las veces que contó su historia familiar, una de ellas fue ante sus compañeros de militancia universitaria. Ellos la escucharon exponer su vida junto a su padre de una manera descarnada, como intentando limpiarse, conjurar fantasmas, justificar una herencia que le había tocado en suerte o, mejor dicho, en desgracia. Hace casi dos años volvió a contarle frente a cuanta cámara o micrófono tuvo a su alcance. Fue cuando anunció que había pedido su cambio de apellido.

“Muchos vecinos del barrio donde hago trabajo social se enteraron por la televisión de mi historia y cuando me veían se acercaban y me abrazaban. Eso fue muy emocionante. La mamá de una compañera de trabajo, que nació durante el Holocausto, me llamó por teléfono y lloramos juntas. Creo que en algunos sectores de la sociedad logré romper con la teoría de los dos demonios”. □

GUATEMALA

Louisa Reynolds desde Ciudad de Guatemala

Paraíso de asesinos misóginos

Feminicidios aumentan, y más brutales que nunca.

Indiana Barrios Recinos, de 27 años, acababa de dejar a sus dos hijos en la escuela y estaba subiendo a su auto cuando fue abatida de cuatro disparos a la cabeza por su ex esposo, Rodrigo Maldonado, con quien estaba disputando en los tribunales la custodia de los niños. El asesinato ocurrió en la zona 11 de Ciudad de Guatemala, un distrito de clase media residencial.

Dos horas después, el mismo día 10 de agosto, se encontró el cuerpo de una mujer en Loma Alta, pequeño poblado en San Juan Sacatepéquez, a unas dos horas de Ciudad de Guatemala. La mujer, de entre 18 y 20 años, había sido asesinada con un instrumento punzocortante, y sobre su estómago se leía un mensaje escrito con bolígrafo que decía “Por cobrar impuestos”.

Esta joven, posiblemente integrante de una pandilla juvenil, nunca fue identificada, y sus restos fueron enterrados en una bolsa con el simple rótulo XX en una fosa común.

El feminicidio está alcanzando proporciones epidémicas en algunos países centroamericanos, particularmente Guatemala y El Salvador (NA, Abr. 19, 2006). Las estadísticas son escalofriantes: entre el 2002 y el 2006 fueron asesinadas 1,398 mujeres en Guatemala, según la Policía Nacional. En lo que va de este año ya han sido asesinadas 271 mujeres y 35 niñas en Guatemala, y pese a campañas realizadas por grupos de mujeres y organizaciones de derechos humanos, la espiral de la violencia sigue empeorando.

Las autoridades suelen restar importancia al problema, sosteniendo que estos asesinatos son parte de un problema más amplio de creciente violencia pandillera en toda la región, que afecta a la sociedad en su conjunto, no sólo a las mujeres. Pero grupos de mujeres dicen que lo que ha ocurrido no es sólo el aumento en el número de asesinatos, sino también el ensañamiento con que se ha quitado la vida a estas mujeres.

Según un estudio de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, realizado en el 2006, 80% de hombres fueron asesinados con arma de fuego, lo cual no implica contacto físico entre asesino y víctima. Por el contrario, 69% de las mujeres fueron asesinadas por arma de fuego, y el resto mediante formas directas de violencia tales como puñaladas, puntapiés y puñetes, evidencia de la intención del asesino de imponer su superioridad física sobre su víctima, expresada también mediante diferentes formas de tortura tales como violación y mutilación genital.

En Guatemala y El Salvador, los países con la más elevada tasa de feminicidios, la muerte violenta de mujeres ha coincidido con el aumento de la violencia pandillera. Las guerras por territorio entre pandillas rivales suele ocasionar la muerte de mujeres asociadas con miembros de las pandillas, pues la pareja de un pandillero es considerada propiedad de su novio y por tanto blanco legítimo de un ataque.

Cuando la muerte violenta de una mujer ocurre en el hogar, el asesinato suele ser resultado de muchos años de abuso físico y psicológico contra la víctima. En ambos casos, grupos de mujeres y organizaciones de derechos humanos acentúan el hecho de que la causa fundamental de la violencia contra las mujeres puede encontrarse en una estructura social patriarcal que todavía ve a las mujeres como ciudadanas de

estadísticas en relieve

AMÉRICA LATINA/EL CARIBE

Exportaciones sí, pero con valor agregado. Si bien la región se ha visto favorecida en los últimos años por el crecimiento constante de las exportaciones gracias a los altos precios de las materias primas —principalmente metales y petróleo— y al crecimiento económico mundial, existen algunos riesgos latentes, señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

En su informe “Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2006. Tendencias 2007”, la CEPAL alerta que la exportación de materias primas no garantiza un crecimiento estable.

“La bonanza económica que vive la región abre una ventana de oportunidad para sentar las bases de un crecimiento sostenido de mediano plazo, mediante inversiones en infraestructura, innovación y capital humano que permitirían, además de agregar más valor y conocimiento a sus exportaciones, generar condiciones más estables de crecimiento y avance en equidad”, dice el documento. —NA.

AMÉRICA LATINA/EL CARIBE Crecimiento de exportaciones 2003-2006 (Tasas de crecimiento anuales en porcentajes)

País	Precio	Volumen
Venezuela	32.0	7.1
Chile	28.9	9.3
Perú	21.5	13.8
Ecuador	17.4	7.4
Colombia	17.4	6.5
Bolivia	15.3	12.7
Brasil	10.6	12.9
México	8.0	6.0
Guatemala	6.6	5.7
Uruguay	6.3	14.4
Argentina	5.9	9.6
Honduras	5.5	5.2
Paraguay	4.9	5.5
El Salvador	4.7	1.9
Haití	4.5	11.7
Costa Rica	3.8	6.6
Nicaragua	3.0	16.0
Rep. Dominicana	2.5	2.4
Panamá	1.7	11.1

Fuente: CEPAL

MÉXICO

Televisoras pierden batalla. El Senado mexicano aprobó el 12 de setiembre una reforma que privará a poderosos medios de comunicación electrónicos de las millonarias sumas que recibían en las campañas electorales.

Las nuevas normas —que deben ser sancionadas por la Cámara de Diputados— establecen que los partidos políticos que reciben financiamiento público no podrán contratar en forma directa su publicidad. Las cuñas, por cuya transmisión los medios recibían jugosas sumas de los partidos, serán administradas por el Instituto Federal Electoral.

Asimismo, las normas prohíben a cualquier grupo empresarial contratar espacios electrónicos para expresar opiniones políticas durante las campañas electorales.

Los medios de comunicación sostienen que tales disposiciones los perjudican económicamente y atentan contra la libertad de expresión. Los legisladores les recordaron que las medidas sólo se aplicarán durante campañas electorales federales cada tres años y por un periodo que no excederá los tres meses que duren las campañas.

En los comicios presidenciales del 2006, cerca del 80% de los más de US\$324 millones de fondos públicos que gastaron los partidos políticos fueron a parar a manos de los medios de comunicación. En ese proceso se difundieron 757,545 cuñas, especialmente en Televisa y TV Azteca. —IPS.

segunda clase inferiores a los hombres.

La prevalencia de actitudes sexistas se expresa en códigos penales discriminatorios que no imponen sentencias adecuadas por los diversos delitos asociados con la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, una ley que estipula que no se presentarán cargos contra un hombre acusado de violación si elige casarse con su víctima, recién fue derogada a fines del 2005.

En algunos países, como México, donde el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, en el norte, atrajo considerable cobertura mediática y se convirtió en el centro de muchas campañas de organizaciones internacionales de derechos humanos, una nueva ley que entró en vigencia en febrero (*NA, Mar. 21, 2007*) ha reconocido el feminicidio como un crimen distinto del simple asesinato, en cuanto que contiene el factor agravante de la violencia sexual motivada por la misoginia.

La ley fue aprobada por el Congreso mexicano debido a una enérgica campaña liderada por la legisladora Marcela Lagarde, del Partido de la Revolución Democrática. También es importante señalar que la ley mexicana también busca que 30% de los miembros del Congreso sean mujeres.

La diputada Nineth Montenegro, presidenta de la Comisión Legislativa de Asuntos de la Mujer de Guatemala, sostiene que no es probable que esto ocurra en su país, donde sólo 9% de las mujeres son congresistas, en el futuro cercano. “No sería posible ni aunque hubiera 100 diputadas en el Congreso. Las mujeres en la Asamblea Nacional no están vinculadas al tema de la mujer”, dijo.

Así como las leyes discriminatorias, el sexismo también trae como consecuencia un presupuesto sesgado que asigna sumas irrisorias a las instituciones de mujeres creadas para abordar la violencia doméstica y la discriminación. Hay varias organizaciones de mujeres auspiciadas por el gobierno guatemalteco que se ocupan principalmente del acceso igualitario al empleo y de la violencia doméstica. Pero tienen sólo un ínfimo 0.25% del presupuesto, que puede ser visto como evidencia de que las autoridades han instituido estas organizaciones como ejercicio de relaciones públicas para apoyar de boca para afuera la equidad de género.

Las organizaciones de derechos humanos han criticado fuertemente la forma sensacionalista y superficial con que los medios de comunicación han informado sobre el creciente número de feminicidios en la región, lo cual crea estereotipos y estigmatiza a las víctimas.

Según la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, los medios tienden a dar a las muertes relacionadas con las pandillas una mayor cobertura, presentando la guerra por territorios entre pandillas rivales como la única y no como una de las causas que hay tras los asesinatos.

La cobertura de estas muertes suele incluir observaciones sobre que “la víctima llevaba blusa escotada y minifalda”, implicando que las víctimas de estos crímenes eran “mujeres libertinas”, y que las mujeres deben quedarse en casa y vestirse modestamente para evitar ser blanco de la violencia. □

JAMAICA

Inter Press Service

No al continuismo

Electores ponen fin a 18 años de Partido Nacional Popular en el poder.

Portia Simpson Miller, la primera mujer en encabezar un gobierno en Jamaica —desde marzo del 2006 cuando tomó el relevo al veterano Percival Patterson como primera ministra—, había apelado a los votantes para afirmar su mandato reelegiendo al Partido Nacional Popular (PNP), al que ella lideró por primera vez en elecciones generales el 3 de setiembre.

Los votantes se negaron, y mientras Bruce Golding, de 58 años, asumía como nuevo primer ministro el 11 de setiembre, poniendo fin a 18 años de aislamiento político del Partido Laborista Jamaicano (PLJ), la populista Simpson Miller, de 62 años, se quedaba contemplando el futuro que le espera en la política jamaicana.

El PLJ ganó 33 de los 60 asientos disputados en las elecciones generales que los observadores, incluidos los de la Comunidad Caribeña y la Organización de Estados Americanos (OEA), dijeron que habían reflejado adecuadamente la voluntad de la población, aunque la campaña había estado plagada de violencia, si bien no a la escala de los comicios de 1980 en que perdieron la vida más de 800 personas.

Ambos partidos se culparon entre sí por la violencia, que en cierto momento amenazó con cancelar las votaciones en algunos distritos.

En las elecciones generales del 2002, bajo el liderazgo de Patterson, el PNP retuvo el poder por un cuarto mandato sin precedentes, con una mayoría de ocho escaños y una ventaja de 5%.

Este vez, el margen de victoria fue tan pequeño que el PLJ superó por 50.1% a 49.7% al PNP.

Los resultados fueron tan apretados que Simpson Miller se negó a reconocer su

derrota la noche en que se anunciaron los resultados preliminares.

“Estas elecciones están demasiado apretadas para decir ya quién ganó. Hay varios escaños que el [PNP] impugnará. No vamos a quedarnos cruzados de brazos y dejar que gente use delincuentes para decidir el futuro de Jamaica”, añadió.

“Si teníamos alguna duda de que la primera ministra Simpson Miller no era idónea para el cargo, ya no la tenemos. Su descortés discurso... después de la derrota de su partido en las ánforas fue chocante, por decir lo menos”, dijo en un editorial el diario *Jamaica Observer*.

“Conceder la derrota, especialmente después de una áspera competencia, es el deber patriótico de los grandes líderes”, dijo.

Simpson Miller se tomó una semana para conceder que su partido había perdido.

El analista político Peter Wickham dijo que los observadores habían “malinterpretado el elevado nivel de apoyo a Simpson Miller y creían que era un reflejo del apoyo a su estilo y quizás que se le permitiría conducir su política nacionalmente de modo similar al nivel más parroquial en que ella operaba”.

Wickham dijo que si bien muchos jamaíquinos estaban fascinados con la idea de una mujer como primera ministra, “esto no significó que sería medida según estándares diferentes a los aplicables a los hombres que se desempeñaron anteriormente en ese puesto”.

Muchos comentaristas dicen que Golding puede haber ganado las elecciones gracias al debate sostenido entre los dos líderes, el primero en la política jamaíquina. La mayoría de analistas han subrayado que Golding superó a Simpson Miller en su comprensión de las problemáticas nacionales y la presentación del mensaje de su partido.

El experto en encuestas de opinión Bill Johnson dijo que, en su punto de vista, los electores estaban “buscando una razón por la que deberían votar por el Partido Nacional Popular, mientras que el Partido Laborista Jamaíquino ha dado una razón, si bien no sólida, de la necesidad de un cambio”.

Simpson Miller, que hizo historia al convertirse en la primera mujer primera ministra del país en el 2006, disfrutaba de apoyo popular entre los jamaíquinos, especialmente la clase trabajadora, y su carisma y su larga trayectoria en defensa de los pobres la hacían una figura encantadora.

Golding, por otra parte, era visto como una persona brillante, aunque no cálida ni carismática. Pero hacia el fin de la campaña sus índices de aprobación se remontaron, y al menos una encuesta lo puso delante de Simpson Miller como el líder más favorecido para regir el país en estos momentos.

El comentarista político Paul Ashley reconoció que había mucho en juego en las elecciones, al punto que el perdedor enfrentaría la perspectiva cierta del olvido político.

El día de las elecciones fue “el día más importante para ambos líderes porque me parece a mí que el perdedor se enrumbará al ocaso”, dijo Ashley sobre Simpson Miller y Golding, quienes estaban liderando por primera vez a sus respectivos partidos en elecciones generales.

Los comentaristas políticos habían sostenido que Simpson Miller enfrentó una difícil tarea para unir al partido en cuya conducción sucedió a Patterson en una acerba elección interna el año pasado, y Ashley también se había preguntado si el PNP podría ir a las elecciones poniendo “primero al partido y no a las personalidades”.

Durante la campaña, Golding acusó al partido gobernante de no manejar eficazmente los asuntos de la nación en los últimos 18 años. Dijo que desde 1989, salvo los dos primeros años, Jamaica nunca había experimentado siquiera 3% de crecimiento económico por dos años consecutivos, y que el país había acumulado unos 460,000 desempleados.

También observó que el índice de asesinatos había aumentado de 413 en 1988 a 1,500 hoy, y que muchos niños estaban dejando la escuela sin saber leer y escribir.

“No podemos seguir funcionando así. Podemos hacerlo mejor”, dijo. □

URUGUAY

Raúl Zibechi para Programa de las Américas*

Los sin tierra urbanos

Cooperativas de viviendas enfrentadas con gobierno.

Luego de casi cuatro décadas luchando por la tierra urbana y por la construcción de sus casas, las cooperativas de viviendas por ayuda mutua se enfrentan al gobierno progresista del presidente Tabaré Vázquez porque criminaliza las ocupaciones y pone trabas a los préstamos.

En abril el Parlamento aprobó una ley que establece penas de cárcel desde tres meses a tres años a quienes ocupen tierras. La sorpresa es que todo el gobernante Frente Amplio apoyó la nueva ley pese a que el ministro de Vivienda, Mariano Arana, se mostró contrario a lo decidido por los diputados oficialistas.

Dos meses después, la justicia procesó con prisión a cinco cooperativistas que

notas breves

- De mantenerse el ritmo de destrucción actual por la deforestación y los incendios, la Amazonia en **Brasil** desaparecerá por completo en el 2080, advirtió a fines de agosto el Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia.

- En 10% fue reducida la ayuda que EEUU otorga a **Colombia** para combatir el narcotráfico y los grupos armados, a través del Plan Colombia, y que para el año fiscal 2007-2008 está prevista en unos US\$500 millones. Entre el 2000 y el 2005, EEUU destinó al Plan Colombia \$4 mil millones.

- Según la oficina en **Ecuador** del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el primer semestre del 2007 se registraron en ese país 1,151 nuevos casos de sida. La mayor cantidad de infectados están en el grupo de los adultos entre 25 y 29 años, obreros y desocupados.

- El 3 de setiembre se iniciaron en **Panamá** los trabajos de ampliación del canal que une los océanos Atlántico y Pacífico. El proyecto tiene un costo de US\$5 mil millones y su conclusión está prevista para el 2014, cuando se cumplen 100 años de la apertura de esta vía de tránsito marítimo.

- El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones falló el 5 de setiembre por segunda vez a favor del **Perú** en el caso de la demanda de la empresa chilena Lucchetti para que el Estado peruano le pagase una compensación de US\$150 millones por la revocación de la licencia de funcionamiento y cierre de su fábrica construida en una reserva natural en Lima.

“En los dos años que tenemos gobierno de izquierda tuvimos que ocupar para poder tener tierras”.

— Daniel de Souza

habían ocupado un terreno en Punta del Este, lo que puede ser un anticipo de la nueva actitud del gobierno.

“Estamos frente a gente que sabe gobernar y sabe cómo pegarle a los gremios”, dice Daniel de Souza, secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM).

El Reglamento de Cooperativas elaborado por el Ministerio de Vivienda también ha merecido duras críticas de la federación. El nuevo reglamento establece que las cooperativas de vivienda podrán solicitar financiamiento del Estado únicamente en ocasión de los llamados a Postulación de Proyectos Cooperativos que se realizarán una vez al año.

Según el arquitecto Benjamín Nahoum, asesor de FUCVAM, el nuevo reglamento “puede significar un serio obstáculo para el desarrollo del sistema cooperativo”.

“El resultado final es perverso”, porque una cooperativa invierte en todo el proceso un mínimo de dos a tres años. Por ello, “no puede estar sujeta a ganar o perder un concurso” del que no conoce las bases al comenzar el proceso.

Para esta organización que nació en 1970, en un periodo de crecimiento de los movimientos sociales de Uruguay, lo que está sucediendo bajo un gobierno de izquierda les parece desconcertante: “Esto no es una cuestión espontánea. Estos gobernantes no son nuevos, los que están en el Ministerio de Vivienda llevan casi 20 años gobernando Montevideo”.

El movimiento para la construcción de viviendas de forma cooperativa y por ayuda mutua es una modalidad por la cual un grupo de familias (entre 10 y 200) constituyen grupos asociados que funcionan de forma democrática. Luchan por la tierra, la ocupan o la compran con financiación estatal o de organizaciones no gubernamentales, y luego construyen sus viviendas con base en el esfuerzo familiar.

Hombres y mujeres trabajan en pie de igualdad en la construcción de las viviendas aportando todos la misma cantidad de horas de trabajo, gestionan el proceso de diseño y construcción con la asamblea como medio de tomar resoluciones, y luego administran el complejo habitacional. El propietario de las viviendas es la cooperativa, las familias tienen derecho al uso pero no las pueden vender sin autorización del colectivo.

Los cooperativistas construyen todas las viviendas sin saber quién ocupará cada una de ellas. El día que se inauguran, se realiza un sorteo y cada familia ocupa la que le corresponde. La participación de las mujeres en todas las etapas, incluyendo la construcción, marca una diferencia con otros movimientos sociales.

FUCVAM tiene además una escuela de formación y una planta industrial que provee materiales a las cooperativas. La participación igualitaria en los trabajos, la asistencia a asambleas y el aporte económico son obligatorios para todos los asociados.

Los barrios cooperativistas están en su mayor parte en las periferias de las ciudades. Muchos grupos de cooperativas cuentan con guarderías para niños, clínicas de salud y locales comerciales autogestionados por los propios vecinos. El movimiento cuenta además con 22 bibliotecas y 17 gimnasios en los barrios de Montevideo.

Las casi 500 cooperativas de vivienda agrupadas en FUCVAM son el resultado de tres grandes oleadas de lucha por la tierra, que se tradujeron en la construcción de algo más de 20,000 viviendas. Entre 1970 y 1972, más del 40% de los recursos estatales para vivienda se destinaron al financiamiento de las cooperativas.

La federación fue creada el 24 de mayo de 1970 en la inauguración de la primera cooperativa, en la pequeña localidad de Isla Mala en el interior del país. En ese periodo se crean gran cantidad de cooperativas a partir de los sindicatos, que construyen complejos habitacionales que en algunos casos superan las 800 viviendas. Nacen unas 150 cooperativas y FUCVAM se extiende a casi todo el país.

El segundo salto del movimiento se registró en 1989. Era un año electoral y la presión por vivienda había sido postergada por la dictadura (1973-1985), al punto que a comienzos de esa década se multiplican los asentamientos urbanos ilegales donde viven desocupados e inmigrantes rurales. En julio de ese año, luego de una masiva asamblea, cuatro cooperativas ocupan tres terrenos. En noviembre Vázquez gana las elecciones en Montevideo y crea una “cartera de tierras” fiscales que comienzan a ser negociadas con el movimiento cooperativo.

En los siguientes años unas 250 cooperativas acceden a la tierra y muchas comienzan la construcción de las viviendas, en una década plagada de movilizaciones, entre las que destacan ocupaciones a los ministerios de Vivienda y Economía.

El tercer impulso se registró el año pasado, bajo el actual gobierno. En octubre del 2006 ocuparon un predio de la empresa estatal de ferrocarriles abandonado desde hace 40 años. En las negociaciones consiguieron 20 predios en los que se instalaron 40 cooperativas.

“Todavía tenemos 30 cooperativas sin tierra”, dicen en la federación. En casi 40 años el movimiento construyó viviendas para 22,000 familias mientras unas 4,000 esperan acceder a tierras para comenzar los trámites.

“Qué casualidad que nunca hubo problema con la cartera de tierras y en los dos años que tenemos gobierno de izquierda tuvimos que ocupar para poder tener tierras”, apunta De Souza. Desde 1989 no realizaban ocupaciones. Sienten que con la nueva legislación no podrán ocupar tierras y el acceso a los préstamos para la construcción será cada vez más lento. □

* Programa del Center for International Policy

Derechos indígenas protegidos

Instrumento de la ONU establece respeto a la autonomía, autodeterminación y territorios ancestrales.

Tras 22 años de negociaciones, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) finalmente aprobó el 13 de setiembre la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que protegerá a los más de 370 millones de indígenas en todo el mundo.

El texto, impulsado por países con importante presencia indígena como Guatemala, México y Perú, fue aprobado por 143 votos a favor, cuatro en contra (Australia, Canadá, EEUU y Nueva Zelanda) y 11 abstenciones, entre ellas Colombia.

El documento, que consta de 46 artículos, establece parámetros mínimos de respeto a los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la libre determinación, la autonomía, propiedad de la tierra, acceso a los recursos naturales en las tierras y territorios que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido, y que los Estados aseguren reconocimiento y protección jurídica a esas tierras y territorios.

Asimismo, reconoce derechos individuales y colectivos relativos a la educación, la salud, el empleo, a fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones, y perseguir su propio desarrollo conforme sus necesidades y aspiraciones.

Líderes indígenas latinoamericanos saludaron la aprobación de la Declaración.

“Este es un gran paso en la lucha a favor de los pueblos indígenas”, dijo el presidente de Bolivia, Evo Morales. “El derecho que siempre tuvieron, pero que les fue negado, ahora será ejercido de manera plena”.

Por su parte, el dirigente mapuche chileno Aucan Wilcaman manifestó que “el derecho internacional ha dado un paso importante en el reconocimiento de los derechos colectivos”.

La ONU precisó que aunque la Declaración no es vinculante, “representa un instrumento dinámico en las relaciones internacionales que ayudaría a proteger a los indígenas contra la discriminación y la marginación”.

El secretario general de la ONU, el coreano Ban Ki-moon, calificó la adopción de la Declaración como un “triumfo de todas las comunidades indígenas del mundo”.

“Se trata de un momento histórico en que los Estados Miembros de la ONU y los pueblos indígenas se han reconciliado con sus dolorosas historias y han demostrado su disposición de avanzar juntos por el camino de los derechos humanos, la justicia y el desarrollo para todos”, manifestó Ban.

El titular de la ONU urgió a los gobiernos y a la sociedad civil a incorporar de inmediato a sus agendas de derechos humanos y desarrollo los asuntos relacionados con las garantías de los indígenas, y los instó a elaborar políticas y programas a todos los niveles para que la Declaración se convierta en una realidad.

Según el Banco Mundial (BM), 10% de los alrededor de 550 millones de latinoamericanos son indígenas y se encuentran entre los más pobres y marginados (NA, Jun. 1, 2005).

En Bolivia y Guatemala, donde más de la mitad de la población es pobre, esa proporción se eleva a 75% entre los indígenas, asegura el BM. En el caso de Ecuador, 96% de la población originaria de zonas rurales es pobre, mientras en México la incidencia de la pobreza extrema es 4.5 puntos mayor en las municipalidades indígenas en comparación con las no indígenas. En el Perú, casi la mitad de los hogares pobres son indígenas.

El director de UNICEF para América Latina y el Caribe, Nils Kastberg, señaló en un comunicado que si bien los instrumentos regionales son importantes, no son suficientes “porque deben ir acompañados de una fuerte voluntad política que se traduzca en políticas públicas que no discriminen, en reformas legislativas y en asignaciones presupuestarias para acabar con la exclusión que empobrece y afecta a millones de indígenas en todo el mundo”. □

“Este es un gran paso en la lucha a favor de los pueblos indígenas. El derecho que siempre tuvieron, pero que les fue negado, ahora será ejercido de manera plena”.

— Evo Morales